

En un mundo en transición: la defensa de las soberanías, el multilateralismo y la reconstrucción del internacionalismo

JOSÉ LUIS CENTELLA GÓMEZ

Presidente del Partido Comunista de España



La humanidad avanza hacia el final de una etapa histórica cuyo agotamiento se percibe en cada grieta del orden internacional.

No estamos ante una crisis puntual, ni mucho menos ante unas cuestiones improvisadas; la política de Trump de saltarse las normas y legalidades internacionales, es algo estudiado y programado para generar un proceso profundo, estructural, que afecte a la arquitectura misma sobre la que se levantó el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Durante décadas, las instituciones internacionales, con las Naciones Unidas como referencia, ofrecieron un marco de reglas compartidas que, con todas sus limitaciones y todas sus deficiencias, permitía cierto equilibrio entre potencias, cierto freno en los conflictos y un espacio, a veces estrecho, a veces insuficiente, tramposo para la cooperación entre estados. Ese edificio, construido sobre la memoria del horror que supuso la barbarie nazifascista en la Segunda Guerra Mundial y la aspiración a la paz, está siendo dinamitado conscientemente por la política agresiva y depredadora de Donald Trump como referencia de un nacionalcapitalismo para sustituirlo por la ley del más fuerte.

La globalización neoliberal, que prometía prosperidad universal, en su fracaso ha dejado tras de sí desigualdades crecientes y tensiones sociales, crisis financieras recurrentes, emergencia climática, migraciones masivas y la revolución tecnológica, que están siendo el caldo de cultivo para la reaparición de nacionalismos agresivos.

En este contexto, la figura de Donald Trump y la corriente política fascista que encarna representan una confrontación deliberada con el multilateralismo que defienden los países emergentes en la búsqueda de unas relaciones internacionales más justas y solidarias. La visión del mundo de Trump no se articula en torno a reglas compartidas, administradas por organizaciones

internacionales, sino a la lógica del poder del más fuerte, en una lógica que tiene múltiples similitudes con la lógica de expansión del nazifascismo que llevó a la humanidad a la Segunda Guerra Mundial.

Para ese proyecto, las instituciones internacionales no son espacios de cooperación, sino obstáculos que limitan la capacidad de la potencia dominante para imponer sus intereses. La ONU, la OMC, los acuerdos climáticos o los marcos de seguridad colectiva son percibidos como corsés que conviene debilitar o ignorar. La apuesta es clara: sustituir el derecho por la fuerza, la negociación por la presión bilateral, la estabilidad por la incertidumbre calculada.

Este enfoque, como decía, no es un accidente ni una estridencia de un líder enloquecido, responde a una concepción del mundo en la que el imperialismo se sabe incapaz de contener el avance de los países emergentes, fundamentalmente de China, y trata de mantener su hegemonía mediante la imposición, instalando un orden internacional sin reglas en el que quien tiene más poder militar, económico o tecnológico puede moldear la realidad a su conveniencia.

La pregunta, entonces, no es solo hacia dónde conduce esta estrategia, que sabemos que es hacia el desastre, sino plantear qué alternativas existen para evitar que la transición hacia un nuevo orden derive hacia un precipicio que puede poner en riesgo la supervivencia de la vida en el planeta tal y como la conocemos.

Por eso, la cuestión central de nuestro tiempo es saber si seremos capaces de construir un nuevo orden basado en reglas multilaterales, respeto a la soberanía de los pueblos y beneficio compartido, o si nos resignaremos a un mundo regido por la ley del más fuerte.

En este debate, los BRICS, y en particular China, desempeñan un papel cada vez más relevante. No porque aspiren a sustituir una hegemonía por otra, sino precisamente por lo contrario, por tratar de representar la emergencia de un mundo más plural, más multilateral, donde la voz de los países en desarrollo adquiere un peso que durante décadas les fue negado. La ampliación de la alianza BRICS+, la creación de instituciones financieras alternativas y la defensa de un multilateralismo inclusivo son señales de que existe un espacio para imaginar un orden distinto, menos dependiente de los intereses de una sola potencia.

China, con su propuesta de una «comunidad de futuro compartido para la humanidad», plantea una visión que, más allá de las interpretaciones geopolíticas, introduce un elemento fundamental: la idea de que la cooperación no es una opción moral, sino una necesidad estratégica. En un mundo interdependiente, ningún país puede enfrentar solo desafíos como el cambio climático, las pandemias, la seguridad alimentaria o la regulación de la inteligencia artificial. La soberanía, lejos de ser incompatible con el multilateralismo, encuentra en él un marco que la protege frente a presiones externas y la inserta en un sistema de reglas que limita la arbitrariedad.

Los BRICS, en este sentido, pueden actuar como un contrapeso que favorezca la democratización de la gobernanza global. No se trata de crear bloques



enfrentados, sino de ampliar el espacio de decisión, de diversificar las alianzas, de permitir que más países participen en la definición de las normas que regirán el siglo XXI. La multipolaridad, si se gestiona con responsabilidad, puede ser una oportunidad para construir un orden más equilibrado, donde la fuerza no sea el único criterio de legitimidad.

Pero la reestructuración del orden mundial no depende solo de los estados. También está en juego la capacidad de los pueblos para articular proyectos colectivos que contrarresten el avance de la derecha radical y del neofascismo. En muchos países, estos movimientos se alimentan del miedo, de la precariedad, de la sensación de abandono que ha dejado la globalización. Su discurso simplifica la complejidad del mundo, señala enemigos internos y externos y promete soluciones autoritarias a problemas que requieren cooperación y solidaridad.

Frente a esa deriva, recuperar el internacionalismo no es un ejercicio nostálgico, sino una tarea urgente. El internacionalismo del siglo XXI no puede limitarse a consignas ni a declaraciones retóricas. Debe construirse sobre la base de desafíos compartidos y respuestas concretas. Debe articular redes globales de cooperación entre movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, instituciones académicas y fuerzas políticas progresistas. Debe reivindicar la solidaridad como un principio activo, capaz de traducirse en políticas públicas, en acuerdos internacionales, en mecanismos de redistribución y protección social.

El internacionalismo contemporáneo debe ser, además, profundamente democrático. No puede reproducir jerarquías ni paternalismos. Debe escuchar las voces del Sur Global, reconocer la diversidad de experiencias y construir alianzas basadas en el respeto mutuo. En un mundo donde la extrema derecha intenta imponer un relato de confrontación civilizatoria, el internacionalismo debe ofrecer una narrativa alternativa: la de la cooperación entre pueblos, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la justicia climática y la paz.

La solidaridad, en este contexto, no es un gesto altruista, sino una estrategia de supervivencia colectiva. La pandemia lo demostró con brutal claridad: cuando un país queda desprotegido, todos lo están. Lo mismo ocurre con el clima, con la seguridad alimentaria, con la regulación de las tecnologías emergentes. La interdependencia no es una opción; es un hecho. La cuestión es si la gestionamos desde la cooperación o desde la imposición.

La reestructuración del orden mundial, por tanto, no está escrita de antemano. No es un destino inevitable, sino un campo de disputa. Trump y quienes comparten su visión apuestan por un mundo sin reglas, donde la fuerza determine la justicia. Otros actores, entre ellos los BRICS y China, defienden un multilateralismo renovado, capaz de ofrecer estabilidad y respeto a la soberanía. Y, en paralelo, los pueblos amenazados necesitan reconstruir un internacionalismo que haga frente a la desigualdad, al autoritarismo y al odio.



En esta disyuntiva, la humanidad tiene la oportunidad, y la responsabilidad, de elegir qué tipo de futuro quiere construir. Podemos avanzar hacia un mundo fragmentado, dominado por la desconfianza y la competencia sin límites, o podemos apostar por un orden basado en reglas, cooperación y beneficio compartido. Podemos permitir que la extrema derecha imponga su relato de miedo o podemos recuperar la fuerza transformadora de la solidaridad.

Como decía, hay que ser conscientes de que el futuro no está decidido, que no estamos derrotados, sino que hay disputa. Y esa disputa se libra hoy, en cada foro internacional, en cada movimiento social, en cada decisión política.

Comprender esta realidad es clave para entender que es necesario dar una respuesta a esta recuperación del nazifascismo como instrumento del capitalismo para frenar su decadencia y para asumir que es necesaria una alianza mundial de carácter social y político, que deje claro que no va a permitir que Trump domine Venezuela, Cuba o Groenlandia, ni que siga sometiendo a humillaciones a Europa, ni tampoco que intente arrinconar a China.

En este sentido hay que asumir que el cambio de táctica del imperialismo obliga a tener en cuenta una serie de cuestiones que durante décadas se consideraron superadas.

Una de ellas es la idea de que, frente al nazifascismo, la política de coexistencia pacífica, formulada en el contexto de la Guerra Fría del siglo xx, podía servir como marco suficiente para gestionar tensiones extremas en ese marco; sin embargo, aquella doctrina nació para evitar que la rivalidad entre grandes potencias desembocara en una confrontación directa y se apoyaba en un supuesto fundamental: incluso en condiciones de antagonismo ideológico, existía un mínimo consenso sobre la necesidad de preservar un orden internacional basado en límites compartidos. La coexistencia pacífica no implicaba armonía, pero sí reconocía que la supervivencia de la humanidad dependía de contener la escalada y de aceptar que ningún actor podía imponer unilateralmente su voluntad sin poner en riesgo al conjunto. La coexistencia pacífica fue concebida para gestionar la rivalidad entre potencias

Hoy, ese supuesto está siendo cuestionado de manera abierta cuando Donald Trump proclama sin ambigüedades que solo reconoce la ley del más fuerte, cuando reivindica la agresión como instrumento de política exterior y se desprecia el derecho internacional o cualquier regla que considere un obstáculo para alcanzar sus objetivos expansionistas; en este contexto la coexistencia pacífica deja de ser un marco suficiente para evitar que se consolide la regla del más fuerte como la norma que sostiene las relaciones internacionales.

La cuestión no es que el principio haya perdido su valor como base de un futuro de paz y progreso para la humanidad, sino que está política de coexistencia pacífica, por sí sola, no tiene respuesta para la pregunta de qué ocurre cuando uno de los actores niega ese marco, lo ridiculiza o lo dinamita deliberadamente.



Por lo tanto, en ese escenario de confrontación con políticas de raíz nazi-fascista, la política de coexistencia pacífica no puede limitarse a la mera tolerancia mutua, necesita ir acompañada de mecanismos activos de defensa del derecho internacional, de respuestas colectivas tempranas y de una comprensión renovada de la relación entre soberanía nacional y responsabilidad global. No se trata de abandonar el principio, sino de adaptarlo a un entorno donde la agresión ya no es encubierta, sino reivindicada y ejercida sin ningún tipo de consideración; donde la desinformación se utiliza como arma estratégica; donde la extrema derecha internacional se coordina, aprende y replica tácticas con una rapidez inédita mientras el resto de fuerzas sociales y políticas tienen dificultad para articular una respuesta que vaya más allá de las declaraciones institucionales. Los casos del cerco impuesto por Trump a la llegada de petróleo a Cuba o del encarcelamiento en EE. UU. de un presidente reconocido por Naciones Unidas son clarificadores de este escenario.

La historia del siglo xx enseña que la inacción también es una forma de decisión política. La pasividad frente al ascenso del fascismo no evitó la guerra, la facilitó. La renuncia a defender el derecho internacional no preserva la paz, la debilita. Si alguien cree que Trump se va a contentar con arrasar con los Gobiernos de Cuba y Venezuela y va a dejar tranquilos a los Gobiernos de Brasil, Colombia o México, comete la misma ingenuidad que cometieron quienes creyeron que Hitler se contentaría con anexionarse Austria y Checoslovaquia.

Desde la experiencia histórica, hay que decir que frente a la actual deriva autoritaria y agresiva de Trump, la respuesta no puede recaer únicamente en los gobiernos ni limitarse a declaraciones diplomáticas. Requiere una movilización más amplia, que involucre a instituciones, movimientos sociales, organizaciones internacionales, fuerzas políticas democráticas y a la ciudadanía en su conjunto.

Repensar el papel disuasorio del derecho internacional implica reconocer que las normas no son eficaces por sí mismas: necesitan mecanismos de cumplimiento, alianzas que las respalden y una voluntad colectiva de impedir que sean vulneradas impunemente.

La defensa del derecho internacional no puede ser selectiva ni instrumental; debe ser coherente, universal y basada en principios, no en conveniencias coyunturales. Solo así puede recuperar su capacidad de frenar la agresión y de ofrecer un marco de estabilidad.

La necesidad de respuestas colectivas tempranas es otra lección que la historia ofrece con claridad. Las amenazas autoritarias no se detienen solas; cuando se normaliza el discurso del odio, cuando se toleran las violaciones de derechos humanos, cuando se minimizan los ataques a las instituciones democráticas, el terreno queda abonado para retrocesos más profundos. La comunidad internacional no puede esperar a que la agresión se materialice plenamente para reaccionar; debe actuar antes, cuando aún es posible contenerla sin recurrir a medidas extremas.



La relación entre soberanía nacional y responsabilidad global también debe ser revisada. La soberanía no puede convertirse en un escudo para justificar la impunidad ni para negar la interdependencia que define al mundo contemporáneo. Defender la soberanía implica, precisamente, proteger a los pueblos frente a la injerencia, la violencia y la imposición externa. Pero esa defensa solo es sostenible si se inserta en un sistema internacional que garantice reglas comunes y mecanismos de cooperación. La soberanía aislada es una ilusión; la soberanía cooperativa es una necesidad.

Finalmente, el equilibrio entre diálogo y firmeza exige una reflexión profunda. El diálogo es indispensable, pero no puede convertirse en una coartada para la inacción. La firmeza es necesaria, pero no debe confundirse con la escalada irresponsable. La clave está en combinar ambos elementos de manera inteligente, defendiendo principios sin renunciar a la diplomacia, y utilizando la diplomacia para reforzar los principios. La coexistencia pacífica del siglo XXI no puede ser una simple reedición de la del siglo pasado; debe ser una versión más robusta, más consciente de los riesgos y más preparada para enfrentarlos, que parta de que al fascismo no se le frena con apaciguamientos, sino demostrando la firmeza necesaria para impedir se genere el relato de que puede conseguir todo lo que se proponga sin ser frenado.

En este contexto, la sociedad civil adquiere un papel central. La defensa de la democracia, de los derechos humanos y del multilateralismo no puede depender únicamente de los estados. Requiere una ciudadanía activa, informada y comprometida; requiere movimientos sociales capaces de articular alternativas; requiere redes internacionales que contrarresten la narrativa del odio y la lógica del enfrentamiento. La lucha contra el nazifascismo del siglo XXI no se libra solo en los parlamentos o en los foros diplomáticos: se debe librar también en las calles, en los medios de comunicación, en los centros de trabajo y estudio, en las redes sociales y en todos los espacios donde se disputa el sentido común.

La coexistencia pacífica sigue siendo un principio valioso, pero necesita ser defendida, actualizada y fortalecida. No basta con proclamarla, hay que dotarla de contenido, de instrumentos y de voluntad política. En un mundo donde la agresión se reivindica y la democracia se ve amenazada, la defensa de la paz debe ser activa, consciente y organizada. Solo así podrá resistir la embestida de quienes pretenden devolvernos a un tiempo donde la fuerza era la única ley.

Para avanzar en este sentido es imprescindible reforzar su legitimidad, capacidad coercitiva y autonomía frente a las grandes potencias. Esto implica una refundación de las NN. UU. con capacidad para evitar que Trump acabe con ellas. Asimismo, se requiere una política exterior coordinada, especialmente en Europa, que combine defensa firme del derecho internacional con independencia estratégica frente a presiones unilaterales; a la agresión de Trump a Venezuela, Irán, Cuba, etc., no se la puede combatir con meras declaraciones gubernamentales.



Pero, como hemos dicho, al mismo tiempo es necesario construir consensos democráticos básicos sobre el valor del multilateralismo, la cooperación y la prevención de conflictos, evitando la normalización del discurso de fuerza, cualquier colaboración con el fascismo por intereses cortoplacistas tendrá un coste histórico, similar al que pagaron los partidos de derechas que colaboraron con Hitler. Aquí planteamos la necesidad de apoyar desde todo el mundo la presión social, la movilización por la paz y la denuncia de las políticas agresivas a la que está reaccionando una parte importante de la sociedad civil de los EE. UU. para que no sea aniquilada como lo fue la oposición civil en los regímenes nazifascistas del siglo xx.

El valor de este análisis histórico, que no es ciencia ficción, no reside en el alarmismo, sino en ser capaces de diseñar una anticipación responsable, porque ignorar los paralelismos estructurales entre el pasado y el presente no es prudencia, sino ceguera. La pregunta central no es si la historia se repetirá exactamente, sino si aprenderemos lo suficiente como para interrumpir sus dinámicas antes de que alcancen un punto de no retorno.

En ese sentido, el desafío actual no es solo político o geoestratégico, sino profundamente ético: decidir si el orden internacional seguirá basándose en normas compartidas o si se impondrá, sin disfraces, la ley del más fuerte. La respuesta a esa pregunta definirá el siglo xxi.

Cómo organizar y poner en marcha esta respuesta desde la más amplia alianza política, social e institucional es el reto que tienen las principales articulaciones de carácter progresista.

Por el lado institucional está el Grupo de Países Amigos de la Paz de la ONU, que reúne a países como México, China, Brasil y defiende potenciar la ONU como instrumento para resolver los conflictos internacionales desde la negociación diplomática, evitando repetir la barbarie de una nueva confrontación mundial.

Por el lado político y social, el reto lo tienen que asumir el Foro de São Paulo, el Partido de la Izquierda Europea, el Consejo Mundial por la Paz, la Internacional Progresista, el Encuentro de Partidos Comunistas y Obreros, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, Alba Movimientos, Celac Social, el Foro Internacional por la Paz, etc.

Desde esta perspectiva tenemos que repetir que toca que las fuerzas sociales políticas y sindicales que no están de acuerdo con la vuelta del hegemonismo fascista de Trump lo frenen antes de que sea demasiado tarde para el futuro de la humanidad. Se trata de aprender de los errores del siglo xx y construir esa alianza mundial antes de que sea demasiado tarde y nos veamos en una confrontación mundial de impredecibles consecuencias, porque la historia nos enseña que al nazifascismo y sus pretensiones expansivas no se le contenta a base de cesiones parciales. ★

